

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1992/SR.40  
10 de noviembre de 1992

ESPAÑOL  
Original: FRANCES

# COMISION DE DERECHOS HUMANOS

48º período de sesiones

## ACTA RESUMIDA DE LA 40a. SESION (PRIMERA PARTE)\*

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
el lunes 24 de febrero de 1992, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. SOLT (Hungría)

más tarde, Sr. WALKER (Australia)

## SUMARIO

Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, con inclusión de:

- a) Cuestión de los derechos humanos en Chipre
- b) Situación de los derechos humanos en el Kuwait ocupado

---

\* La segunda parte del acta resumida de la sesión se publicará con la signatura E/CN.4/1992/SR.40/Add.1.

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse a un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.92-11032/8385f (S)

Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES, CON INCLUSION DE:

a) CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIPRE

b) SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL KUWAIT OCUPADO (tema 12 del programa) (continuación) (E/CN.4/1992/3; E/CN.4/1992/4; E/CN.4/1992/25; E/CN.4/1992/26; E/CN.4/1992/27 y Corr.1; E/CN.4/1992/28 y Add.1; E/CN.4/1992/29; E/CN.4/1992/30/Add.1; E/CN.4/1992/31; E/CN.4/1992/32; E/CN.4/1992/33; E/CN.4/1992/34; E/CN.4/1992/35; E/CN.4/1992/36; E/CN.4/1992/37; E/CN.4/1992/60; (S/23212); E/CN.4/1992/64; E/CN.4/1992/67; E/CN.4/1992/68; E/CN.4/1992/72; E/CN.4/1992/CRP.1; E/CN.4/1992/CRP.2; E/CN.4/1992/NGO/2; E/CN.4/1992/NGO/5; E/CN.4/1992/NGO/10; E/CN.4/1992/NGO/13; E/CN.4/1992/NGO/19; E/CN.4/1992/NGO/24; E/CN.4/1992/NGO/34; E/CN.4/1991/24; E/CN.4/1991/27; E/CN.4/1991/28; E/CN.4/1991/29; E/CN.4/1991/30; E/CN.4/1991/31; E/CN.4/1991/33 y Add.1; E/CN.4/1991/34; E/CN.4/1991/35; E/CN.4/1991/36; A/46/446; A/46/529; A/46/542; A/46/544 y Corr.1; A/46/606; A/46/647)

1. El Sr. TZELIOS (Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Etnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras Minorías) dice que algunas de las transformaciones que se han producido recientemente en el panorama internacional otorgan mayor actualidad aun a la cuestión de los derechos de las minorías. Los griegos del sur de Albania son una de las minorías cuyos derechos fundamentales se ven sistemáticamente vulnerados por las autoridades. En el pasado estas últimas intentaron eliminarlos por procedimientos brutales y ahora, con más habilidad, tratan de asimilar la minoría griega a la población albanesa en general o de hacerla abandonar el país. Más de 100.000 albaneses de origen griego se han visto obligadas a refugiarse en Grecia por el Gobierno de Albania, que les hizo creer que en ese país encontrarían condiciones de vida más satisfactorias. La minoría griega no puede tampoco ejercer su derecho a la libertad de religión ni de educación y la enseñanza del griego no está permitida en Albania, salvo en ciertas zonas muy concretas cercanas a la frontera con Grecia. Las autoridades albanesas no han atendido las reiteradas reivindicaciones de la minoría griega en materia de enseñanza, reivindicaciones que son, sin embargo, muy modestas en comparación con las normas reconocidas por la comunidad internacional. Hay pruebas asimismo de que las autoridades albanesas consideran griegos a algunos hijos de una familia y albaneses a sus hermanos y hermanas, lo que constituye un medio ingenioso de manipular el número de personas de origen griego.

2. Al parecer, la persecución de la minoría griega ha adquirido una nueva dimensión. En una carta abierta, de fecha 12 de diciembre de 1991, dirigida al Primer Ministro de Grecia por los habitantes de un pueblo del sur de Albania, éstos denuncian las agresiones de grupos armados de origen albanés. Parece ser que las autoridades no tomaron ninguna medida y que incluso soldados albaneses participaron en el brutal ataque al poblado. A principios del año en curso ocurrió algo similar en otra comunidad.

3. En lo que respecta a los derechos políticos, en vísperas de las últimas elecciones, celebradas el 31 de marzo de 1991, se procuró sistemáticamente limitar la representación del partido minoritario griego (Omonoia) en el Parlamento mediante el recurso de no autorizarle a presentar oficialmente candidatos en las circunscripciones electorales con un alto porcentaje de griegos de origen. Más aún, el Parlamento albanés prohibió recientemente la creación de partidos u organizaciones políticos fundados en criterios étnicos o religiosos, con lo cual será imposible que éstos participen en las próximas elecciones del 24 de marzo. La minoría griega se ve así privada de voz en el Parlamento y en la nueva sociedad albanesa, que se encuentra en proceso de transformación. El régimen albanés no permite tampoco que los exiliados políticos vuelvan a su país para tomar parte en las elecciones. Por ejemplo, se ha denegado recientemente la autorización para entrar en Albania al Sr. Tzelios, miembro de la minoría griega.

4. El mundo civilizado no debe tolerar esta situación. El Gobierno de Albania, que trata de conquistar la aceptación de la comunidad internacional con falsas promesas de reformas, vulnera al mismo tiempo los derechos de su minoría griega. Resultan aún más intolerables estos abusos de Albania cuanto que, como es de dominio público, este país ha sido admitido recientemente en la Conferencia de Helsinki y en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5. En Turquía, siguen también violándose de forma flagrante los derechos humanos, no sólo de los curdos, sino también de la propia población turca, como ha señalado recientemente la organización Helsinki Watch. A pesar de que a las autoridades turcas les gusta presumir de paladines de los derechos humanos, las tropas turcas, que continúan ocupando una tercera parte de Chipre, niegan toda responsabilidad en relación con las desapariciones ocurridas desde la invasión de la isla en 1974. Los colonos turcos de la zona ocupada, de la que fue expulsada por las fuerza de las armas el 82% de la población grecochipriota, superan ahora en número, si se incluyen las tropas turcas de ocupación, a la comunidad turcochipriota que vivía inicialmente en la isla. El asentamiento de colonos constituye una violación grave y patente tanto de los derechos de los grecochipriotas como de los turcochipriotas. La organización que representa al Sr. Tzelios desea reafirmar la necesidad de garantizar a todos los chipriotas el derecho a la libertad de circulación y de instalación y el derecho a la propiedad.

6. La Sra. ALTUNA DE SANCHEZ (Internacional Demócrata Cristiana) dice que la explosiva situación de los derechos humanos en Haití se remonta a la dictadura duvalierista. Recuerda que tras los reiterados golpes de Estado a fines del decenio de 1980, el Presidente Aristide fue elegido en un contexto jurídico-político cuestionable y sobre un telón de fondo de violencias. Es igualmente necesario tener en cuenta, que a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Haití no tiene un régimen presidencialista sino un régimen parlamentario clásico comparable al de varios países europeos. Según la Constitución de Haití, el Presidente es el Jefe del Estado, pero las prerrogativas y responsabilidades del Gobierno corresponden al Primer Ministro, que debe obtener la confianza del Parlamento. Lamentablemente, es

necesario reconocer que durante el ejercicio de su mandato, el Presidente Aristide toleró o justificó que se cometieran violaciones flagrantes de los derechos humanos como la ejecución, por orden directa suya de varios opositores. Estos excesos deben ser objeto de una investigación y los responsables sancionados con arreglo a las leyes de Haití y los convenios internacionales en los que el país es parte. Pero al quebrantar el orden institucional, los autores del golpe de Estado militar han abierto un nuevo capítulo sangriento en la historia de Haití. La comunidad internacional debe exigir la restitución del Presidente Aristide en su cargo, al mismo tiempo que el respeto de la Constitución haitiana y de las facultades y prerrogativas del Parlamento, elegido asimismo por el pueblo.

7. En una reunión celebrada recientemente en Caracas, la Organización Demócrata Cristiana de América, que es miembro de la Internacional Demócrata Cristiana, exigió el retorno de la democracia, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos en Haití, así como el levantamiento inmediato del embargo que absurdamente, perjudica a las principales víctimas de la asonata militar. Parece ser además, según informaciones recibidas ese mismo día, que la Organización de los Estados Americanos ha propuesto una nueva fórmula para permitir el regreso del Presidente Aristide. Toda solución deberá incluir además medidas urgentes de reactivación económica para atacar las causas profundas de la inestabilidad política del país.

8. En Cuba, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado considerablemente en los últimos cuatro meses, como consta en el informe del Representante Especial encargado de examinar la situación en ese país, Sr. Rivas Posada (E/CN.4/1992/27). Un miembro del Parlamento cubano reconoció, según parece, que en Cuba había una oposición de unas 1.000 personas, que se podían clasificar en grupos de derecha, moderados y personas relacionadas con la Iglesia católica. Para luchar contra todas las ideas "contrarrevolucionarias" y sobre todo contra los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición, las "Brigadas y Destacamentos de acción y respuesta rápida" constituidos en el marco de los Comités de Defensa de la Revolución, no vacilan en recurrir a la violencia. Las detenciones por motivos políticos se multiplican y el año anterior tres activistas fueron condenados a muerte tras juicios sumarísimos y pese a las múltiples peticiones de clemencia dirigidas a las autoridades cubanas desde el mundo entero.

9. Los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición cubana, por su parte, no cesan de reclamar una solución pacífica y nacionalista a los problemas de su país, rechazando por principio cualquier forma de violencia y preconizando el diálogo y la reconciliación. Las autoridades cubanas han respondido a ese activismo pacífico con una dureza aún mayor, dirigida en particular contra los miembros de comunidades cristianas, los firmantes de la "Declaración de los intelectuales" y los partidarios del "Proyecto Socialista Democrático". Todos los gobiernos democráticos, especialmente los de América Latina, deben interceder ante el Gobierno de Cuba para que éste permita por lo menos que el representante especial o el experto designado por las Naciones Unidas visiten la isla y cumplan su mandato.

10. Monseñor CONEDERA (Pax Romana) dice que en 1991 el Presidente de su país, Guatemala, se comprometió ante el pueblo de Guatemala y el resto del mundo a poner fin a los conflictos armados internos, romper el régimen de impunidad y reunir a todas las fuerzas activas del país para superar los problemas socioeconómicos. En abril del mismo año, se iniciaron negociaciones directas entre el Gobierno y la oposición, agrupada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), lamentablemente sin la participación del conjunto de los sectores de la sociedad. En el marco de las negociaciones, el conflicto armado se agudizó y se registró un recrudecimiento de los conflictos y abusos de que son víctimas las comunidades de población en resistencia, a manos del ejército, a través de Comités de autodefensa civil integrados por aproximadamente 500.000 hombres, apoyados por los militares agentes civiles del ejército comisionados en las aldeas y otros civiles armados capturan al azar a jóvenes, incluidos menores y deficientes mentales, para el servicio militar, violando lo establecido en la Constitución y las leyes.

11. La impunidad de los culpables constituye un problema especialmente grave, en la medida en que genera escepticismo respecto de las instituciones, alimenta el desaliento y generaliza la violencia. Las declaraciones de buena voluntad de las autoridades no se han materializado aunque se lograron tímidos avances. El hecho de que la mayoría de los casos sucedieran antes de 1991, no exonera a las autoridades de la obligación de esclarecerlos y castigar a los responsables. Pese a que el número de violaciones de derechos humanos disminuyó durante el primer año de Gobierno del Presidente Serrano, la represión fue más selectiva y a veces se pretendió disfrazarla de delincuencia común. El tributo pagado, en especial, por las comunidades religiosas ha sido muy alto, y algunos de sus miembros han tenido que refugiarse en el extranjero. La policía también ha practicado la tortura para obtener confesiones. En cuatro de esos casos, Pax Romana presentó recursos de hábeas corpus, pero ignora el resultado de sus gestiones. Siguen produciéndose desapariciones forzosas de dirigentes sindicales o estudiantes y de defensores de los derechos humanos. La prensa local o extranjera ha sido también intimidada y hay periodistas que han recibido amenazas.

12. Ante tal situación, el poder judicial resulta inoperante. Los recursos de hábeas corpus no son efectivos y los procesos judiciales se estancan. Los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en actos delictivos no siempre son puestos a disposición de los tribunales. Hay que reconocer, sin embargo, que el Ministerio Público carece de la capacidad investigadora para esclarecer violaciones de derechos humanos, sobre todo cuando no se hace presión internacional para que se practiquen las oportunas diligencias. La inseguridad reina pues en el país y las instituciones no están en condiciones de brindar protección a los ciudadanos. Las recomendaciones al Gobierno de Guatemala que figuran en la resolución 1991/51 de la Comisión no han sido aplicadas, dado que las autoridades no han intensificado las investigaciones sobre los casos de violaciones de los derechos humanos ni han enjuiciado a los responsables. Tampoco se han simplificado los procedimientos judiciales ni se observan las normas que rigen el reclutamiento en las patrullas de defensa civil. No hay legislación para proteger los derechos de las poblaciones indígenas ni se ha ratificado aún el Convenio N° 169 de la OIT relativo a esas poblaciones.

13. La situación socioeconómica tampoco ha mejorado, sobre todo porque la mayor parte de las tierras pertenecen a propietarios que prefieren la especulación financiera a la agricultura. Por otro lado, 2 millones de campesinos carecen de tierra. Es cierto que la situación se estabilizó un poco en el curso del año anterior gracias a que disminuyó la inflación, se estabilizó la moneda y se redujo considerablemente el déficit presupuestario. Sin embargo, como esa reactivación se debe fundamentalmente a inversiones financieras no productivas, no existe una perspectiva clara de una evolución favorable para la situación de la mayoría de los guatemaltecos, cuando ni siquiera el 30% de éstos goza de pleno empleo. Las inversiones sociales se han reducido en valor real y hay un 53% de analfabetos. La mortalidad infantil es elevada. Cuatro de cada cinco niños están desnutridos. Sería necesario multiplicar por ocho las inversiones en la esfera de la salud para poder atender a las necesidades más urgentes. Tal es la realidad que la Comisión no debe perder de vista en su análisis de la situación de Guatemala, realidad que justifica la petición al Secretario General de designar a un representante especial para que los derechos humanos y las libertades fundamentales no sigan siendo papel mojado en Guatemala.

14. La Sra. MITTERRAND (France-Libertés) desea abordar la situación de los pueblos del Tíbet y Timor, así como del pueblo curdo que tienen en común una misma reivindicación, a saber, que se respete su identidad y su derecho a llevar una vida digna.

15. Según las informaciones de cientos de refugiados tibetanos y de su representante, el Dalai Lama, recogidas por la Sra. Mitterrand personalmente, una sexta parte de la población del país, es decir, 1,2 millones de tibetanos, han muerto desde 1949 (fecha en que China invadió el Tíbet) como consecuencia de la ocupación china; un tibetano de cada diez ha sido encarcelado en alguna ocasión y casi siempre golpeado y torturado en prisión. Las violaciones más recientes de que se tiene noticia al respecto se produjeron a raíz de las manifestaciones pacíficas en Lhasa, entre agosto y septiembre de 1991.

16. Por otro lado, aunque en el informe preparado en 1991 por la organización "International Campaign for Tibet", se afirmaba que el Gobierno de China había autorizado excepcionalmente a sus nacionales establecidos en el Tíbet así como a los tibetanos de los núcleos urbanos importantes a tener un segundo hijo e incluso, en las zonas rurales, un tercero, el testimonio de las mujeres tibetanas torturadas, mutiladas y esterilizadas por haber quedado embarazadas una segunda vez y el anuncio de la extensión de la política china de control de la natalidad a la región autónoma del Tíbet, ponen de manifiesto una profunda contradicción. Además, la política de traslado de poblaciones, vigente desde 1983, amenaza con transformar al pueblo tibetano en una minoría en su propio territorio. La libertad de culto, por otra parte, es objeto de constantes restricciones que se reflejan en una presencia policial permanente en los monasterios budistas y en el control que ésta ejerce sobre la enseñanza del tibetano. Este idioma ha quedado relegado a segundo término desde que el chino se convirtió en idioma oficial. Por último, el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales del Tíbet, practicado por China, especialmente de la madera, así como los vertidos de productos industriales no tratados que se filtran en el subsuelo, comprometen gravemente el equilibrio del medio ambiente y amenazan también el equilibrio ecológico de los países limítrofes.

17. Entre 1959 y 1961, la Asamblea General, "consciente..., preocupada..., deplorando..." denunció esas violaciones en sus resoluciones 1353 (XIV) y 1723 (XVI). Treinta años después, en 1992, la Comisión de Derechos Humanos, siempre "consciente..., preocupada..., deplorando..." podría aprobar otra resolución y pedir que se respete al hombre, no sólo en lo tocante a su integridad física sino también a su cultura, y que se hagan esfuerzos por hallar el medio de entablar el diálogo para solucionar los problemas del Tíbet, y sobre todo, que los Estados representados, con el apoyo de todas las organizaciones no gubernamentales, busquen la forma de poner en práctica esa resolución.

18. En el Timor, la invasión militar indonesia del 7 de diciembre de 1975 puso fin al proceso de descolonización iniciado por Portugal. La Asamblea General aprobó inmediatamente la resolución 3485 (XXX) en la que se pedía al Gobierno de Indonesia que retirara sus fuerzas armadas del Timor oriental. Sin embargo, hay que reconocer que 16 años después de la aprobación de esa resolución, más de 200.000 personas, es decir, al menos un tercio de la población del Timor, han muerto como consecuencia directa de la ocupación y que el pueblo se opone a una política de asimilación forzada, de control de la natalidad y de apropiación de sus riquezas naturales, que no goza de libertad de expresión, de reunión, ni de pensamiento y que es víctima de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas. Numerosos testimonios dignos de fe confirman tales violaciones; además la matanza del 12 de noviembre de 1991 está aún fresca en la memoria de todos. Ese día, los militares indonesios abrieron fuego sobre la muchedumbre y causaron la muerte de un centenar de personas, muertas a las que deben añadirse las ejecuciones extrajudiciales de que han sido víctimas, al parecer, algunos testigos.

19. France-Libertés celebra que el Sr. Boutros Ghali, Secretario General de las Naciones Unidas, haya designado a un representante especial para investigar esos trágicos acontecimientos. Ha llegado el momento de que una vez más la comunidad internacional, "consciente..., preocupada..., deplorando..." condene la anexión del Timor oriental, que constituye una violación del derecho internacional, en particular del derecho de los pueblos a la libre determinación y la independencia. Sobre todo, ha llegado la hora de que las Naciones Unidas y los gobiernos de sus Estados Miembros encuentren la forma de hacer respetar las resoluciones que aprueban y, en particular, de exigir al Gobierno de Indonesia que retire sus fuerzas armadas del territorio del Timor oriental y permita que el pueblo de ese territorio decida libremente su destino y acceda a la independencia.

20. A continuación, la Sra. Mitterrand se refiere a la situación de la población curda y dice que nadie puede ignorar las consecuencias desastrosas que para ella tiene el embargo impuesto por los propios dirigentes iraquíes ni que tras la colocación de minas en la región habitada por los curdos y la destrucción de sus ciudades y pueblos, sólo les ha quedado un erial sembrado de ruinas. Todo defensor de los derechos humanos debe exigir que ese pueblo reciba garantías de que podrán volver libremente a sus ciudades y aldeas para reconstruirlas; que se aplique la resolución 688 del Consejo de Seguridad que prevé que los organismos especializados de las Naciones Unidas presten ayuda a los curdos, y que se haga todo lo posible para que el Gobierno del Iraq levante el embargo impuesto a las poblaciones curdas sobre los alimentos y los productos de primera necesidad. Tal es el deber de las Naciones Unidas y el de la Comisión, conciencia de la humanidad.

21. El Sr. BETZIOS (Consejo del Arzobispado Ortodoxo Griego de América del Norte y del Sur) señala a la atención de la Comisión las violaciones flagrantes y sistemáticas cometidas por un grupo de extremistas nacionalistas y por una parte del antiguo Estado federal de Yugoslavia que se ha proclamado "República de Macedonia". Se sabe, de fuente bien informada, que las víctimas de esas violaciones eran grupos pertenecientes a las minorías albanesa, serbia, valaca y griega de la República de Skopje y sobre todo popes del patriarcado serbio ortodoxo, la minoría serbia que había solicitado docentes para sus comunidades y particulares serbios que murieron de resultados del interrogatorio de la policía de Skopje. Desde hace tres años se habla mucho de Kosovo, pero la Comisión y la comunidad internacional no se han interesado para nada por las minorías que viven en esa República. A eso hay que añadir un nuevo tipo de violaciones de los derechos humanos, a saber, aquellas que padece la población griega. El Gobierno de la República de Skopje y sus nacionalistas fanáticos han lanzado contra esa población una campaña de odio racial que oculta, en realidad, la intención de anexionar algunas provincias griegas. La utilización misma del nombre de "Macedonia" es una impostura. Macedonia, es en efecto una región cuyo carácter helénico ha vuelto a quedar confirmado recientemente por excavaciones arqueológicas; el adjetivo "macedonio" no puede calificar nada que no sea griego. Con la utilización de esa terminología usurpada, la República de Skopje está en realidad allanando el camino a su expansión territorial y amenaza así la paz y la seguridad de toda Europa sudoriental. El Consejo Arzobispal Ortodoxo Griego de América del Norte y del Sur hace un llamamiento a la Comisión para que aplique el principio que constituye el fundamento mismo de los Pactos, a saber, la responsabilidad de todos en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a que no escatime esfuerzos para poner fin a las maniobras políticas de la República de Skopje, que suponen una violación de la Carta de las Naciones Unidas.

22. La Sra. BANDETTINI DI POGGIO (Liga Internacional por los Derechos y la Libertad de los Pueblos) se felicita ante todo del acuerdo de paz firmado en El Salvador pero advierte a la comunidad internacional de que no debe bajar la guardia. En efecto, las dificultades están lejos de haberse superado totalmente y hay que perseverar en los esfuerzos por materializar ese acuerdo.

23. En lo que respecta al caso de Guatemala, la oradora señala que nadie se atreve a reconocer la verdad, que es que nada ha cambiado en Guatemala, pese a que el país sea "democrático" desde 1986, y que la Comisión no adopta medida alguna. Ni durante el primer régimen civil que sucedió a los 30 años de dictadura, ni durante el segundo, que está en el poder desde enero de 1991, la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales no ha mejorado en absoluto. La resolución 1991/51 de la Comisión constituye en realidad, como habían previsto varios Estados Miembros y las ONG, un aval de impunidad para toda nueva violación. De fuente fidedigna, confirmada por el informe del Experto Independiente, se sabe que las fuerzas armadas y la policía siguen cometiendo violaciones. La sociedad civil, que continúa en el mismo estado de postración, no puede instaurar un Estado constitucional. Sólo una perversión del espíritu ha podido hacer creer que los dictadores civiles y militares renunciarían a sus prácticas criminales con el establecimiento de una "democracia frágil", es decir, una democracia bajo tutela militar.



24. la Sra. Bandettini Di Poggio recuerda que en 1990 se produjo un acontecimiento de primera magnitud, la firma del Acuerdo de Oslo, que marcó la apertura de un proceso de negociaciones entre el Gobierno, el ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Ese proceso histórico, iniciado en abril de 1991, suscitó grandes esperanzas, aunque, no puede hacerse abstracción de la extrema lentitud con que avanza el debate sobre los derechos humanos, que figuraba en primer lugar en el programa convenido por las partes interesadas. Esa lentitud se debe básicamente a una falta de voluntad política de la delegación gubernamental. En lo que respecta a la impunidad, al derecho humanitario y al retorno y establecimiento en el país de los refugiados, parece que la situación comienza a desbloquearse, pero por otro lado, el Gobierno no ha reconocido aún los derechos ni aceptado las peticiones de la Comisión Permanente de Refugiados en México ni de las comunidades de población en resistencia que siguen sometidas a la represión militar. Desde 1988, 43.000 refugiados aproximadamente que se encuentran en México han estipulado algunas condiciones para su regreso: que éste sea colectivo, organizado y consentido libre e individualmente; que los repatriados estén acompañados de ONG nacionales e internacionales y de representantes del Alto Comisionado para los Refugiados; que puedan volver a su lugar de origen y recuperar sus tierras; y que se les garantice la libertad de organización y asociación, el derecho a la vida y a la integridad personal y colectiva, así como la libertad de movimiento en el territorio guatemalteco y el extranjero. Esas condiciones aún no han sido aceptadas por las autoridades guatemaltecas.

25. La situación actual sólo engendra frustraciones. Los propios miembros de la Comisión también las padecen, ya que están cansados de oír tantas veces la misma lista de violaciones de derechos humanos y persuadidos en muchos casos de que la situación no puede continuar, pero de todos modos obligados por ciertos compromisos contraídos en alguna cumbre presidencial a declararse impotentes. Las organizaciones no gubernamentales, que son "la conciencia moral" de las Naciones Unidas, también son víctimas de la situación, pues siguen denunciando en vano la represión y la injusticia. Pero las víctimas más claras son los propios guatemaltecos, algunos de los cuales arriesgan la vida y se presentan ante la Comisión con la esperanza de que la comunidad internacional, los comprenda y apoye, no sin advertir que incluso la Comisión -que cuenta entre los miembros de la delegación de Guatemala a militares- no es para ellos un lugar seguro y que pueden ser asesinados al regresar a su país.

26. La Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos espera que la Comisión apruebe en su actual período de sesiones una resolución en la que se denuncien las violaciones persistentes de derechos humanos y libertades fundamentales en Guatemala, en la que se inste a las partes interesadas a que continúen sus negociaciones para concertar un acuerdo concreto que prevea la aplicación inmediata de garantías para el disfrute de los derechos humanos, y en virtud de la cual se cree una estructura internacional sólida e imparcial encargada de vigilar el proceso, sea éste cual fuere, que tenga por objetivo la protección de los derechos humanos o, en el plano político, la conclusión de un acuerdo negociado entre el Gobierno, el ejército y la URNG. La oradora pide a los participantes en el 48º período de sesiones de la Comisión que escuchen el llamamiento que se hace en el libro sagrado de los maya quichés "que todos se alcen, que nadie quede rezagado".

27. El Sr. KRALIK (Checoslovaquia) recuerda que el amplísimo movimiento social de finales del decenio de 1980 en Checoslovaquia ponía de manifiesto la voluntad de los ciudadanos de liberarse de todo aquello que constituyera un obstáculo para su dignidad y sus derechos. Como señaló el Sr. Vaclav Havel, se trataba de una rebelión natural contra la opresión de la historia monocolor y contra la reducción del hombre único al estado de homínido medio en la prisión de la ideología unificadora. Una vez liberados del yugo de la bipolaridad maniquea, entre las contradicciones de la memoria histórica resucitada y de una realidad que los enfrenta a innumerables problemas de todo tipo, son presa de los excesos de la fuerza animal vulgar. Checoslovaquia, como otros países, debe esforzarse por armonizar esos excesos con la aspiración fundamental del animal político aristotélico de vivir en una paz garantizada colectivamente y en una unión armoniosa de intelectos y preguntarse al mismo tiempo cuál es la forma de proteger lo máspreciado para el hombre, considerado como parte integrante de la naturaleza.

28. El Sr. Kralik recuerda el largo camino que ha debido recorrer la humanidad antes de llegar a una democracia fundada en el principio de la igualdad y el reconocimiento de los derechos humanos, democracia que de todos modos no ha logrado evitar el conflicto entre el ciudadano y el Estado. La humanidad ha acuñado varias definiciones del derecho y de la justicia humana universal que van desde el postulado "Jus est quod est justum" a la odiosa fórmula "el derecho es un instrumento de la dictadura del proletariado". La verdad se sitúa entre esos dos polos, y una medida muy sabia para tratar de resolver el problema fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos que ha de definir no solamente lo que es jurídicamente justo, sino también cuáles son los derechos inalienables de todo ser humano.

29. En lo que respecta a cuestiones concretas que guardan una relación directa con los trabajos de la Comisión, el Sr. Kralik señala que durante el año transcurrido el Gobierno de Checoslovaquia ha adoptado medidas para promover la defensa de los derechos humanos, entre las cuales se encuentra la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. El Gobierno de Checoslovaquia ratificará asimismo en el año en curso la Convención Europea de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en esa esfera. A diferencia de algunos Estados, la República Federal Checa y Eslovaca no considera que las cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos sean un asunto exclusivamente interno. Consciente de sus lagunas en esa esfera, está dispuesta por el contrario a aceptar las críticas y desea que todos los países en los que los derechos humanos no se respetan aún plenamente, tales como Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Cuba, Guatemala, el Iraq y el Sudán, procedan de igual modo. Espera también que se logren importantes progresos en materia de derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. En cuanto a Chipre, considera que la situación de los derechos humanos en esa isla no mejorará hasta que no se encuentre una solución justa, duradera y aceptada por ambas partes para el conflicto entre las dos comunidades y agradece en ese contexto, el papel decisivo que desempeñan las Naciones Unidas. Se congratula asimismo de la evolución positiva de la situación en numerosos países. Le complace advertir, en particular, que el Gobierno de Rumania ha manifestado la voluntad de cooperar

con la Comisión, como indica el Relator Especial, Sr. Voyame, en su informe (E/CN.4/1992/28), y toma nota con satisfacción de la conclusión en El Salvador de un acuerdo de alto el fuego que cree las condiciones necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país. Espera, por último, que continúe el proceso de eliminación del apartheid que se inició en Sudáfrica, aunque estima que la Comisión de Derechos Humanos debe seguir de cerca la cuestión hasta que ésta se resuelva definitivamente.

30. El 48º período de sesiones de la Comisión reviste especial importancia porque se prevé la adopción de dos nuevos proyectos de instrumentos internacionales, el proyecto de declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas y el proyecto de declaración sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. La delegación checoslovaca espera que la Comisión pueda aprobar en su 49º período de sesiones el proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, habida cuenta de la imperiosa necesidad de proteger a todos aquellos que se atreven a hacer frente al peligro de persecución, prisión, tortura e incluso muerte a que se exponen en ciertos países, como Cuba. El Representante Especial del Secretario General encargado de estudiar la situación de los derechos humanos en ese país, Sr. Rivas Posada, señala, en efecto, en su informe un inquietante aumento de las comunicaciones relativas a las persecuciones de que son al parecer víctimas los disidentes y opositores al régimen cubano.

31. La delegación checoslovaca agradece profundamente el ofrecimiento de Italia de acoger en su territorio la Conferencia sobre los Derechos Humanos de 1993, tras la renuncia de Alemania. A su juicio, esa Conferencia debería permitir hacerse una idea global de todas las cuestiones que se plantean en el ámbito de los derechos humanos. Una de sus principales tareas podría ser la revisión fundamental del conjunto de los mecanismos de vigilancia para lograr una mejor coordinación entre ellos. Queda aún mucho por hacer para garantizar los derechos humanos y salvaguardar el carácter único del ser humano, cuyas cualidades individuales sólo pueden desarrollarse libremente en un marco democrático. El Gobierno de Checoslovaquia, por su parte, seguirá trabajando al servicio de la justicia y de la protección de los derechos humanos a un nivel más alto de responsabilidad.

32. El Sr. HELLER (México) señala que pese a los avances logrados en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en ciertas partes del mundo, así como en la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos tanto de orden interno como regionales, las violaciones de los derechos humanos continúan estando a la orden del día. Siguen siendo muy preocupantes en el Afganistán, Camboya, el Oriente Medio y Chipre, e incluso en Europa, escenario actual de luchas fratricidas invocando el principio de libre determinación y de los derechos de las minorías. La democratización y el consiguiente respeto de los derechos humanos se ven además amenazados por la extrema pobreza, los desequilibrios económicos y la desigualdad social de los países en desarrollo. La coyuntura internacional ofrece, sin embargo, perspectivas prometedoras para el futuro de la protección de los derechos

humanos. Conviene pues reflexionar sobre la necesaria adaptación de la Comisión a los cambios radicales que se han producido en el mundo, a fin de superar las deficiencias y las contradicciones que obstaculizan su acción.

33. En primer lugar, habría que referirse a la politización y al enfoque selectivo que caracterizan los debates de la Comisión desde hace varios años y que ha llevado a que se hiciera caso omiso de la situación de los derechos humanos en varios países cuyo avance hacia la democracia se celebra ahora con entusiasmo, por razones fundamentalmente políticas que ponen de manifiesto la habilidad de la diplomacia de algunos gobiernos, pero que no dicen mucho a favor de la Comisión. Esta nunca examinó, por ejemplo, algunos casos de violaciones flagrantes, masivas, y persistentes como resultado de la política deliberada del Estado en ciertos países y, en cambio, mantiene a países cuyos conflictos internos fueron fomentados y sostenidos militar y financieramente por otros países, sin preocuparse en absoluto de la situación prevaleciente en estos últimos en materia de derechos humanos ni de la naturaleza de su sistema político. El conflicto del golfo Pérsico es ilustrativo al respecto. En segundo lugar, es evidente que el programa de la Comisión muestra profundos desequilibrios. No todos reconocen o perciben de la misma manera el vínculo entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. En tanto que para algunos los derechos del individuo constituyen una prioridad absoluta, independientemente del contexto social, económico y cultural, para otros, las condiciones reales de la sociedad dictan el marco de su ejercicio. Por otro lado, la Comisión debería examinar algunas tendencias nuevas en materia de derechos humanos, tales como el resurgimiento del racismo y sus manifestaciones políticas en los países desarrollados que, habida cuenta de las nuevas corrientes migratorias y de las condiciones de vida precarias de los sectores más desfavorecidos de la población, podrían prosperar. En tercer lugar, hay que subrayar la importancia de la cooperación internacional en materia de derechos humanos. El caso de El Salvador, que la Comisión tiene ante sí desde hace años, demuestra que el diálogo entre las partes en el conflicto, que México siempre alentó en la Comisión y en otros foros, y la búsqueda de una solución negociada a la guerra civil eran condiciones esenciales para sentar las bases de la paz en ese país y para la restauración de los derechos del pueblo salvadoreño.

34. Desde la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han elaborado un gran número de instrumentos jurídicos encaminados a garantizar el respeto de los derechos humanos. La propia Comisión ha establecido varios mecanismos de vigilancia, tales como los informes presentados por los relatores temáticos y los informes por países, que le permiten hacerse una idea precisa y actualizada de la situación de los derechos humanos en diversas partes del mundo. De todos modos, aunque es cierto que la Comisión debe incrementar la eficacia de su labor de promoción de los derechos humanos, este objetivo no puede alcanzarse a costa de las normas fundamentales del derecho internacional. La delegación de México no comparte la opinión de quienes sostienen que en materia de derechos humanos el principio de no intervención ha perdido toda validez y que en el mundo interdependiente de hoy, la soberanía de los Estados es un concepto anacrónico. En efecto, la Comisión está integrada por Estados soberanos y hay que velar por que, en nombre de los derechos humanos, no se vulneren los

derechos de los Estados. Nadie puede ignorar que la defensa de los derechos humanos sirve a veces para justificar las políticas intervencionistas de ciertos países que desearían imponer a los demás su modelo de organización política, en contradicción con el derecho de libre determinación de los pueblos. Es indispensable, por consiguiente, establecer un equilibrio entre la cooperación internacional, la responsabilidad de los Estados en el cumplimiento de los compromisos que han contraído y el respeto de su jurisdicción interna. Deben superarse definitivamente las confrontaciones ideológicas de antaño, cuyos resabios aún influyen en los debates de la Comisión, así como las pretensiones de imponer interpretaciones unilaterales de valores universales. Sobre esta premisas, México está dispuesto a contribuir a todo esfuerzo que ayude a consolidar los mecanismos existentes de protección de los derechos humanos. El fortalecimiento del papel de la Comisión no puede ser monopolio de ningún grupo de países sino un ejercicio de humildad por parte de todos los Estados miembros.

35. El Sr. BROTODININGRAT (Indonesia) desea dar a conocer la versión auténtica de los hechos trágicos ocurridos el 12 de noviembre de 1991 en Dili, capital del Timor oriental, que se saldaron con un cierto número de muertos y heridos. Hay que precisar que lo que ocurrió en Dili no fue el resultado de una política deliberada del Gobierno de Indonesia sino que, por el contrario, ha menoscabado los esfuerzos desplegados hasta ese momento por este último para instaurar la paz en el Timor oriental. Contrariamente a lo que declararon varios oradores que tergiversaron los hechos, la manifestación que tuvo lugar ese día no era en absoluto pacífica. La procesión que partió de la iglesia de Motael en dirección del cementerio de Santa Cruz se convirtió muy pronto, a instigación de un pequeño grupo de agitadores, en un motín durante el cual un jefe de batallón resultó apuñalado y un miembro de las fuerzas del orden herido. Fue en ese clima de tensión y confusión cuando las fuerzas de seguridad dispararon sobre la multitud, lo que provocó una reacción en cadena. El Gobierno de Indonesia estableció inmediatamente una comisión nacional de investigación dirigida por un juez de la Corte Suprema, con el mandato de efectuar una investigación a fondo. El 26 de diciembre de 1991, la Comisión presentó un informe provisional con sus principales conclusiones. Pronto estará concluido el informe definitivo, que aportará todas las pruebas imprescindibles para respaldar a esas conclusiones. La Comisión, que ha cumplido su misión con gran sentido de responsabilidad, ha destacado, sobre todo, la falta de aplicación de las medidas para casos de disturbios, y los fallos en la prestación de asistencia y evacuación de heridos y muertos, cuyo número se elevó a unos 90 y 50 casos respectivamente. En sus conclusiones, la Comisión recomendó que, en interés de la justicia, se abriera un procedimiento contra todas las personas que participaron en los hechos del 12 de noviembre de las que se sospeche que puedan haber transgredido la ley. Inmediatamente después de recibir el informe preliminar de la comisión nacional de investigaciones, el Presidente tomó medidas y ordenó, en primer lugar relevar del mando al comandante de la novena región militar, al comandante de las tropas operacionales del Timor oriental y a todos los oficiales subalternos responsables, así como reunir un consejo militar de honor para investigar el comportamiento de los agentes de seguridad regionales y locales durante el incidente y recomendar, de ser necesario, que se adopten las medidas oportunas. Además, el Presidente pidió al Fiscal General que iniciara

actuaciones contra los culpables de actos ilícitos y al comandante en jefe de las fuerzas armadas que aclarara las discrepancias entre las versiones sobre el número de víctimas. Por último, el Sr. Brotodiningrat señala que 44 de las 57 personas detenidas a raíz del incidente serán puestas en libertad próximamente.

36. Movido por la misma intención de esclarecer los hechos, el Gobierno de Indonesia aceptó recibir al Sr. Amos Wako, Fiscal General de Kenya y autoridad internacional en materia de derechos humanos, en calidad de enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas encargado de investigar el incidente de Dili. El Sr. Wako permaneció en Indonesia del 9 al 15 de febrero y tuvo ocasión de conversar en Jakarta con el Presidente Socharto, con altos funcionarios del Gobierno y jefes del ejército y con los dirigentes de varias organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Además, se reunió en Dili con las autoridades locales. Habida cuenta de la seriedad y firmeza con que reaccionó el Gobierno, la delegación de Indonesia deplora profundamente la exageración y tergiversación deliberada de algunas versiones del incidente, así como el hecho de que algunos oradores, dando rienda suelta a los prejuicios inveterados que tienen contra el Gobierno de Indonesia insistan en descalificar las conclusiones de la comisión nacional de investigación.

37. La delegación de Indonesia espera que ahora que se han establecido las circunstancias exactas de la tragedia, las delegaciones y los observadores de la Comisión se formen una idea más positiva y realista de lo ocurrido. La delegación de Indonesia creyó que podía congratularse en ese sentido de las recientes declaraciones de los Estados Unidos y la Comunidad Europea, que parecían haber comprendido la situación, pero, ante su gran asombro, el mismo día se presentó oficialmente, en nombre de los 12 miembros de la Comunidad Europea y sin siquiera celebrar consultas previas con la delegación de Indonesia, un proyecto de resolución cuyo espíritu, contenido y tono están en evidente contradicción con las declaraciones formuladas, lo que menoscaba la credibilidad tanto de estas últimas como del proyecto de resolución.

38. El Sr. AL-DOURI (Iraq) dice que pese a sus logros, la Comisión no ha podido establecer criterios uniformes para la vigilancia de los derechos humanos y no mide por el mismo rasero a los países, juzgándolos en función de que tengan buenas o malas relaciones con los Estados Unidos. En efecto, los países de Asia, Africa o América Latina que rechazan la dominación norteamericana o europea son severamente criticados, en tanto que está prohibido mencionar las violaciones que se cometen en los Estados Unidos y Europa. Es notorio que varias Potencias se reúnen antes del comienzo del período de sesiones de la Comisión y deciden, con arreglo a las directrices de algunas organizaciones gubernamentales, qué países serán objeto de resoluciones o de investigaciones.

39. Además, la Comisión no siempre es objetiva en su forma de abordar la situación de los derechos humanos en un determinado país. Es cierto que el hecho de que un país esté afrontando una situación difícil no lo exime del deber de respetar los derechos humanos, pero ciertas situaciones extremas, la guerra civil, las situaciones de pobreza absoluta y los trastornos políticos exigen que se dé prioridad a las soluciones económicas, sociales y políticas

urgentes que pueden tener repercusiones negativas sobre el disfrute de los derechos humanos. El Iraq está atravesando una situación catastrófica como consecuencia de los años de guerra contra el Irán, la guerra contra los Estados Unidos y el embargo económico que se le ha impuesto. La Comisión es extremadamente severa con el Iraq, en tanto que muestra su favoritismo por países ricos, como los Estados del Golfo, que también violan los derechos humanos, simplemente porque son aliados o amigos de los Estados Unidos.

40. La comunidad internacional, por otro lado, parece asignar menos importancia al verdadero crimen de genocidio de que ha sido víctima el pueblo iraquí durante la guerra del Golfo. Casi toda la infraestructura económica, hospitalaria y educacional del país fue destruida. los bombardeos mataron a muchísimos civiles y se utilizaron armas prohibidas, como las bombas de fragmentación, contra civiles inocentes; además, aún no se conocen las consecuencias a largo plazo de la destrucción del material radiactivo.

41. A esos crímenes, hay que añadir el embargo económico. Mujeres y niños mueren por falta de alimentos. Los medicamentos son escasos y algunos enfermos graves han de recorrer cientos de kilómetros para ser atendidos en hospitales extranjeros. A veces los países occidentales no les conceden visado de entrada o de tránsito y los enfermos se ven condenados a muerte por falta de asistencia. El embargo afecta también a la esfera cultural, puesto que se carece por ejemplo, del papel necesario para imprimir manuales escolares.

42. Al fomentar los disturbios, todos los países que participan en el bloqueo contra el Iraq son responsables directa o indirectamente de la degradación de los derechos humanos en el país. Con el pretexto de derrocar al régimen político, se hace pasar hambre al pueblo iraquí y se intenta acabar lentamente con la vida de 18 millones de personas. El embargo es un delito que viola todos los derechos humanos y todos los instrumentos internacionales en vigor.

43. La voluntad del Gobierno iraquí de promover los derechos humanos es real, como lo demuestra toda la serie de medidas que se han adoptado desde que terminó la guerra del Golfo. El Iraq se congratula de que se haya enviado a un relator especial, con el que aceptó colaborar sinceramente, y estima que la democracia ya se habría abierto camino en el país si no hubiera sido necesario hacer frente a una conspiración organizada por los Estados Unidos y sus aliados. De hecho, se promulgaron leyes que amparan el multipartidismo, el pluralismo y la libertad de prensa. El estado de excepción en el que se encontraba el país después de la guerra con el Irán se ha levantado. Se estableció un comité consultivo para los derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y se encomendó a comités jurídicos la tarea de estudiar todas las leyes promulgadas durante la guerra con miras a derogarlas o enmendarlas. Las personas detenidas a raíz de las revueltas y disturbios fueron liberadas y han dejado de aplicarse las medidas excepcionales tomadas en esa ocasión. Se está procurando someter a juicio a todas las personas responsables de actos de tortura. Por último, el orador reitera que el principal problema a que hace frente el país en esos momentos es el bloqueo económico y las consecuencias catastróficas que entraña. La delegación del Iraq insta a la Comisión a que tenga en cuenta esa situación y condene a los Estados Unidos y a sus aliados, que son los culpables.

44. El Sr. MBURI (Kenya) declara que la situación de los derechos humanos en Chipre sigue siendo preocupante y que pese a las resoluciones aprobadas por diversos órganos de las Naciones Unidas, no mejora en absoluto. El Movimiento de Países No Alineados y la cumbre de Jefes de Estado del Commonwealth han expresado su preocupación al respecto. La delegación de Kenya ve con agrado la iniciativa del Secretario General de buscar una solución al conflicto. Con miras a facilitar los esfuerzos del Secretario General, hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. La integridad territorial y la soberanía de la República de Chipre deben respetarse y los grecochipriotas y turcochipriotas deben poder volver a vivir en paz.

45. El Sr. HAKIM (Observador de Bahrein) recuerda que a principios de 1991, Kuwait se encontraba aún bajo la ocupación iraquí a raíz de la agresión brutal del Iraq, violando lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. El Iraq ha cometido delitos abominables que han sido condenados por la comunidad internacional. La Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 1991/67 relativa a la situación de los derechos humanos en el Kuwait bajo la ocupación iraquí, en la que se decidió designar a un relator especial para examinar las violaciones de derechos humanos cometidas en el Kuwait ocupado por las fuerzas iraquíes de invasión y ocupación. El Relator Especial designado, Sr. Walter Kälin, ha presentado en el actual período de sesiones de la Comisión un informe muy completo, publicado con la signatura E/CN.4/1992/26, del que se desprende claramente que el Iraq ha violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en particular, el artículo 9, que prohíbe toda detención o prisión arbitrarias. Las fuerzas de ocupación iraquíes son también culpables de varios casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y han infligido a las víctimas daños físicos y psicológicos. La información que ha reunido el Relator Especial demuestra que se cometieron violaciones del derecho a la vida en forma sistemática y deliberada, en contravención del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las normas jurídicas aplicables a los conflictos armados enunciadas en los Convenios de Ginebra de 1949. Además, en violación de los artículos 56 y 57 del cuarto Convenio de Ginebra, el Iraq no respetó los servicios médicos. También trató de destruir sistemáticamente las infraestructuras sociales y económicas (edificios públicos, fábricas, centrales eléctricas, etc.) del Kuwait.

46. La delegación de Bahrein desea señalar a la atención de la Comisión la gravísima cuestión de las personas desaparecidas (párr. 150 del informe). Un año después de la liberación del Kuwait, un gran número de ellas no han sido liberadas. El Iraq manipula la situación y da largas al asunto para no facilitar datos sobre las personas desaparecidas, incluidos los nacionales de Bahrein. La delegación de Bahrein hace un llamamiento al Iraq para que ponga en libertad a las personas que tiene detenidas, tanto si son kuwaitíes como nacionales de otros países, incluido Bahrein.

47. El Sr. CUENOD (Refugee Policy Group) advierte que todos los años las violaciones de derechos humanos (matanzas deliberadas y actos de genocidio, persecuciones raciales, religiosas o étnicas, denegación de derechos civiles, políticos, económicos y sociales) obligan a innumerables personas a abandonar



sus hogares y buscar refugio en otros países. Desde 1980, la Comisión de Derechos Humanos reconoce que existe un vínculo directo entre las violaciones de los derechos humanos y los movimientos de refugiados. Dado que el número de refugiados y personas desplazadas crece continuamente, es urgente que los organismos de las Naciones Unidas adopten medidas para que cesen las violaciones de derechos humanos que producen desplazamientos en masa.

48. El Refugee Policy Group insta a la Comisión a que estudie la posibilidad de efectuar un estudio anual sobre las violaciones de derechos humanos que generan éxodos en masa de refugiados. Ese estudio, que permitirá a la Comisión comprender mejor las causas profundas de las corrientes de refugiados y elaborar medidas adecuadas, podría ser realizado por la Secretaría o por un experto independiente con ayuda de los relatores y grupos de trabajo de la Comisión. La información sobre las corrientes de refugiados podría difundirse en un informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

49. A fin de mejorar la situación de los derechos humanos en los países de procedencia de los refugiados, la Comisión podría adoptar varias medidas. Por ejemplo, podría pedir al Secretario General que estableciera contactos directos con los gobiernos de los Estados de origen, en virtud de la resolución aprobada por la Comisión en 1980. Podría asimismo utilizar en mayor medida los programas de los servicios consultivos para fomentar la protección de los derechos humanos en esos mismos países, y aprobar resoluciones para denunciar la política deliberada de desarraigo de las poblaciones que aplican algunos Estados. El Grupo de Expertos Gubernamentales creado por la Asamblea General en 1981 recomendó que se determinara la responsabilidad de los Estados cuya política genera éxodos en masa.

50. También es urgente establecer un mecanismo de alerta que advierta a la comunidad internacional de la inminencia de movimientos de refugiados. Hasta el momento no se ha avanzado demasiado en la elaboración de un sistema de ese tipo, que permitiría alertar al Secretario General sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos. Con tal fin, convendría ampliar la esfera de actividades de los organismos competentes de las Naciones Unidas y, en particular, reforzar los recursos del Centro de Derechos Humanos, de la OACNUR del PNUD. También podría aprovecharse la información recogida por las organizaciones gubernamentales. Es importante que la acción de las Naciones Unidas sea concertada y que el Coordinador para la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas, recientemente designado, esté en condiciones de recibir y aprovechar toda la información que pueda poner de manifiesto una situación de urgencia.

51. La propia Comisión de Derechos Humanos podría dar la alarma cuando la situación de los derechos humanos se deteriorara rápidamente en un país y amenazara con provocar un éxodo de refugiados. Podría además encargar a la Subcomisión de Lucha contra las Discriminaciones y Protección a las Minorías que vigilara la situación de éstas y señalara a su atención los hechos que considerara alarmantes. Tal vez podría también ocuparse de elaborar un programa para proteger a los refugiados, personas desplazadas y repatriados. Los órganos de las Naciones Unidas deben permanecer atentos a la situación de

estos últimos, que suelen ser víctimas de hostigamientos y detenciones arbitrarias y que a veces, incluso desaparecen pura y simplemente. El Refugee Policy Group insta pues a la Comisión a que dedique al problema de los refugiados y sus causas toda la atención que merece.

52. La Sra. FAUCHERE (Confederación Mundial del Trabajo) señala que los conflictos étnicos y raciales están desplazando a los conflictos ideológicos y poniendo en peligro a las nuevas democracias. Los problemas se ven agravados por la crisis económica que afecta a esos países. En muchos de ellos, cuando los trabajadores tratan de organizarse en forma independiente del poder establecido, son objeto de amenazas de muerte, privación de libertad y despido. La Confederación Mundial del Trabajo desea señalar en especial a la atención de la Comisión la situación en Corea, Côte d'Ivoire, el Brasil, Madagascar, Turquía y el Irán.

53. En Corea, el Gobierno cuenta con un complejo mecanismo para reprimir las huelgas y más de 1.500 sindicalistas fueron detenidos el año pasado. En Côte d'Ivoire, la organización sindical independiente Dignité, creada en 1990, aún no ha sido reconocida por el Gobierno y los miembros de esa organización son víctimas de artimañas burocráticas y de todo tipo de amenazas. En lo que respecta al Brasil, la opinión internacional ignora prácticamente las condiciones inhumanas en que viven y trabajan miles de hombres, mujeres y niños, reclusos en latifundios donde son sometidos a violencias insufribles y padecimientos atroces. Esos seres humanos están obligados a trabajar más de 12 horas por día; si intentan protestar o huir, los matan sin piedad o los muelen a palos. La Comisión Pastoral de la Tierra ha denunciado la existencia de más de 8.800 trabajadores rurales que son tratados como esclavos. En el Brasil sin ir más lejos, los dirigentes de los sindicatos de campesinos son amenazados de muerte o asesinados. Se detiene, incomunica y maltrata a los campesinos que reivindican derechos sobre las tierras. La Confederación Mundial del Trabajo pide al Gobierno del Brasil que tome todas las medidas necesarias para poner fin a esas prácticas inadmisibles.

54. En Madagascar, la democracia pierde terreno y se vulneran los derechos fundamentales cada vez más abiertamente. La lista de delitos imputables al Gobierno no tiene fin: asesinatos, detenciones arbitrarias, no celebración de juicios, tratos inhumanos, torturas, ejecuciones sumarias, etc. Además, la situación social y económica es terriblemente alarmante. El desprecio de las autoridades por la democracia y los derechos humanos se puso de manifiesto el 10 de agosto de 1991, durante "la marcha por la libertad", en el curso de la cual la guardia presidencial disparó sobre una muchedumbre sin armas; el resultado fue una matanza. La situación en Madagascar exige que se realice una investigación para que comparezcan ante la justicia los responsables de las violaciones y se adopten medidas para ayudar a las autoridades a respetar y promover los derechos humanos.

55. Turquía ha aprovechado su posición estratégica durante la guerra del Golfo para intensificar su represión contra el pueblo kurdo. Durante el año 1991, las violaciones de los derechos humanos de los kurdos se multiplicaron. Además, el Gobierno de Turquía ha realizado deportaciones en masa y más de 1,5 millones de campesinos kurdos viven hoy en día en las inmediaciones de las ciudades, en condiciones de penuria inhumanas.

El Gobierno del Iraq, al igual que el Gobierno de Turquía vulnera los derechos fundamentales de los curdos. La Confederación Mundial del Trabajo pide al Gobierno de Turquía y al Gobierno del Irak que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos de pueblo curdo.

56. En lo que respecta al Irán, el Sr. Galindo Pohl, Relator Especial, ha señalado que en 1991 no se había logrado ningún progreso importante en el respeto de los derechos humanos. Un clima de terror reina en el país. Atreverse a criticar al Gobierno se considera un delito y una traición. Si una mujer sale a la calle sin estar totalmente cubierta de la cabeza a los pies corre el riesgo de que la detengan y la condenen a recibir hasta 74 azotes. Además, no se reconoce el derecho a crear organizaciones independientes, incluidos sindicatos. Pese a las amenazas de que han sido objeto, 100.000 trabajadores de refinerías de petróleo y de la industria petroquímica iniciaron una huelga el 4 de febrero; las autoridades reaccionaron inmediatamente y detuvieron a muchos huelguistas. La Confederación Mundial del Trabajo apoya las conclusiones del Relator Especial que recomienda, entre otras cosas, que se siga vigilando la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el Irán.

57. La Confederación Mundial del Trabajo desea rendir homenaje a todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños del mundo que luchan para sobrevivir y para defender y promover los derechos humanos. Estos pagan a menudo con su vida el precio de la libertad y de su dignidad.

58. El Sr. Walker (Australia) ocupa la Presidencia.

-----